

¿Integrados o marginados? El Partido Acción Nacional

*Tania Hernández Vicencio**

Resumen

La situación actual que vive el PAN es producto de una dualidad que marcó su fundación y desarrollo posterior. Como partido se integró, desde la oposición, a la construcción del Estado, toda vez que optó por la vía institucional de su acción política. Esa elección implicó la marginación en su vida interna de distintos grupos de derecha que insistían en la actuación radical hacia un Estado que también los excluyó de su proyecto político. Tras avanzar por distintas vías, al final del siglo XX varios de esos actores relegados emergieron a través del PAN, decididos a disputar el control del partido y el proyecto estatal.

Palabras clave: Estado, oposición, derecha, partido político, PAN.

Abstract

The current situation faced by the PAN results from a conflict that has persisted since its foundation. From its origin, this political party has participated in the creation of the Mexican State by opting for being an opposition that stays within institutional limits. However, there has always been a sector within itself that pushes for a more radical course of action. Groups that belong to that wing were marginalized from the PAN's development and excluded from the State's political project. Towards the end of the twentieth century, different members of those groups emerged, decided to dispute the control of the party and the Mexican State's project.

Key words: state, opposition, right wing, political party, PAN.

Artículo recibido el 28-09-07

Artículo aceptado 26-05-08

* Profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Dirección electrónica: thernandez.deh@inah.gob.mx

Este ensayo plantea una interpretación sobre el desarrollo del Partido Acción Nacional (PAN), como parte de la derecha social mexicana. Desde esta perspectiva intento contribuir a la comprensión del papel que jugó Acción Nacional en la evolución de esa parte de la oposición política¹ y respecto a la edificación del Estado mexicano durante el siglo XX.

La premisa del trabajo es que la situación que vive el PAN es producto de una profunda tensión que marcó su fundación y evolución posterior. Cuando Acción Nacional se fundó en 1939, se integró desde la oposición a la construcción del Estado, toda vez que optó por la vía institucional para canalizar su actuación política. No obstante, esa elección implicó marginar de su vida interna a distintos grupos y expresiones de derecha que insistían en desplegar una acción radical hacia un Estado que también los excluyó de su proyecto original. El PAN representó una excepción entre los partidos de derecha que se formaron en el siglo pasado. Logró permanecer vigente, avanzar poco a poco electoralmente y transitar de la oposición al ejercicio del gobierno. En buena medida la transformación de ese partido se dio en la interrelación con una entidad estatal que fue modificando su naturaleza entre la segunda mitad de los años setenta y la década de los ochenta del siglo XX, un periodo en el que derecha mexicana experimentó un proceso interesante de reorganización. La profunda tensión que marcó el origen de Acción Nacional habría de permanecer latente a lo largo de su historia, pero volvió a manifestarse con toda claridad hacia el final del siglo pasado, cuando varios de los herederos de los actores antes relegados emergieron a través del PAN, decididos a disputar el control del partido y el proyecto estatal.

El trabajo se desarrolla a partir de una periodización que integra los cambios que se dieron en el PAN a la luz de las dos dinámicas. Por un lado, del desarrollo de un Estado que modificó su naturaleza nacionalista hacia un esquema neoliberal, así como del impacto que tuvo dentro de ese par-

¹ No profundizo en la vinculación del PAN con la derecha que ha militado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que, en algunos casos, se expresó a través del gobierno. Sólo comento la identificación que hubo entre la élite del PAN y el ala tecnócrata del PRI a partir de los años ochenta, lo que permite comprender la integración de una amplia alianza de derecha en la década siguiente. Por otro lado, aunque se reconoce que el concepto de derecha implica una relación con la noción de izquierda, en este trabajo no se hace un análisis comparativo.

tido la reorganización de distintos actores de la derecha. Se distinguen tres grandes etapas: su fundación en 1939 en el contexto del nacimiento del moderno Estado mexicano; la crisis del Estado nacionalista y de los gobiernos posrevolucionarios que inicia en la segunda mitad de los años setenta y se manifiesta con claridad en la década de los ochenta; y la etapa en la que se consolida el Estado neoliberal, en el marco de una gran alianza de derecha a partir de la década de los noventa.²

El modelo nacionalista del Estado depositó en éste la rectoría de la modernización del país. Fue la institución estatal la que propició las condiciones para la acumulación del capital privado, al mismo tiempo que garantizó una serie de derechos sociales y construyó sistemas públicos de compensación de las desigualdades, en un esfuerzo por bajar la intensidad del conflicto entre los intereses sociales e individuales.³ El Estado se configuró como un ente complejo capaz de construir una gran coalición con diversos grupos sociales, a partir de los ideales y el discurso de la revolución mexicana. Bajo el esquema neoliberal, en cambio, se ceden importantes espacios a la acción de las fuerzas del mercado y éste se vuelve el mecanismo de coordinación de los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado neoliberal defiende las potencialidades individuales por encima de las colectivas, profundiza la desregulación de los espacios económico, político y social, y la gestión pública se centra en el uso de la técnica más que en la negociación política.

La derecha será entendida como el conjunto heterogéneo de posiciones que se cohesionan a partir de valores como la búsqueda del orden sobre la base de una estructuración vertical de la autoridad, la recuperación de la tradición y la preservación de un estado de cosas dado como natural, donde se conjugan privilegios, asimetrías y selectividad en las relaciones que se dan en las distintas esferas de la vida social.⁴ Buena parte de la derecha defiende la idea de la libre competencia como el mejor camino posible para la organización de la sociedad. Este planteamiento la lleva a defender el principio del mercado político y, en el ámbito económico, las distintas manifestaciones de la derecha pueden coincidir con la reivindicación de la

² La periodización se basa exclusivamente en la dinámica nacional, la limitación que impone la extensión de este trabajo no hace posible referir la influencia que tuvo el contexto internacional.

³ Los rasgos esenciales de los modelos nacionalista y neoliberal del Estado mexicano pueden encontrarse en Rolando Cordera y Carlos Tello, *México, la disputa por la nación*, México, Siglo XXI, 1981.

⁴ Norberto Bobbio, *Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política*, Madrid, Editorial Taurus, 1981.

propiedad privada y con una idea de igualdad basada en la protección de la propiedad privada y familiar frente a las acciones del Estado y del gobierno.⁵ La derecha es pragmática por naturaleza, se adecua a los cambios y en ocasiones se adelanta a hacerlos para conservar un estado dado de cosas.⁶ En algunos casos puede estar asociada con una visión de la moral cristiana que asume sus principios con una perspectiva conservadora. La ultraderecha, por su parte, se caracteriza por su radicalidad y por la defensa de posiciones marcadamente doctrinarias e ideológicas. Generalmente se expresa en relación con temas morales y religiosos, mantiene una actitud fundamentalista, es abiertamente antisemita y anticomunista, y puede funcionar de manera clandestina.

LA FUNDACIÓN DEL PAN

Si el conflicto entre los conservadores y liberales al final del siglo XIX se había centrado en la pérdida del poder de la Iglesia en aras de la construcción de un Estado de esencia liberal, la tensión entre la oposición de derecha y el moderno Estado mexicano que emergió con claridad con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), agregó nuevas tensiones. El novel Estado de rasgos nacionalistas, que encontraba legitimidad en la Constitución de 1917 se cimentó en un discurso ecléctico que abrazaba por igual al colectivismo que al individualismo y que reivindicaba los ideales de justicia social de la revolución tanto como a los valores del liberalismo político. Amparado en ese discurso, Cárdenas habría de instrumentar varias acciones para desarrollar al país por la vía capitalista, sobre la base de una estructura política que articulara estrechamente a los grupos sociales en torno al proyecto estatal. El gobierno se convirtió en una instancia omnipotente y el presidencialismo se consolidó como el articulador de la vida nacional.⁷

⁵ Mario Constantino Toto, "Derecha", en *Léxico de la Política*, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Secretaría de Educación Pública/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Heinrich Böll Stiftung/Fondo de Cultura Económica, 2000.

⁶ Octavio Rodríguez Araujo, *Derechas y ultraderechas en el mundo*, México, Siglo XXI, p. 22.

⁷ La esencia de la propuesta cardenista puede consultarse Tzevi en Medín, *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*, México, Siglo XXI, 1981. Los rasgos de la administración de Cárdenas pueden verse en Luis Medina Peña, *Hacia un nuevo Estado, 1920-1994*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

El reformismo social del gobierno cardenista despertó la suspicacia de la oposición de derecha.⁸ Durante ese periodo se impulsó una profunda transformación de las relaciones de propiedad, se reivindicó el papel del Estado como rector de la economía y se produjo un cambio en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. El impacto positivo de las políticas del gobierno en el terreno laboral, que enfatizaban la importancia de la clase obrera, provocó la movilización del sector más combativo de los empresarios, en especial de un grupo ubicado en el noreste mexicano. La derecha liberal se puso en alerta cuando las corporaciones y los grupos sociales cobraron mayor relevancia en relación con la figura del ciudadano. Para esta vertiente de la oposición era necesario consolidar el equilibrio entre los Poderes de la Unión sustento del pacto constitucional, frente a un Estado centralizador. En su opinión, el Estado partía de una concepción errada sobre la esencia del nacionalismo pues, en lugar de buscar la integración nacional reconociendo la pluralidad y las diferencias, procuraba un difícil proceso de homogenización de la sociedad mexicana.⁹ El enfoque de la lucha de clases que el gobierno cardenista mantuvo como centro de su política, generaba una reacción negativa entre quienes demandaban el reconocimiento de las individualidades. La intensa participación del Estado en todos los ámbitos de la vida social enardecía a aquellos que proponían la creación de las condiciones necesarias para el despliegue de las potencialidades particulares. La insistencia en la educación laica (además de carácter socialista), el fortalecimiento de las escuelas públicas como las nuevas instituciones encargadas de la educación de los mexicanos y el refrendo de la separación entre el poder del Estado y el de la Iglesia, provocó la indignación de la derecha conservadora, en especial de la jerarquía católica y de una diversidad de organizaciones civiles de clase media, que percibían al gobierno cardenista como la expresión de un Estado injusto y excluyente de sus derechos.

Acción Nacional surgió entonces como parte de la reacción de la derecha opositora, frente a lo que consideraba “los excesos de los gobiernos

⁸ Entre la diversidad de organizaciones de derecha que emergieron durante el cardenismo pueden señalarse: en 1934, la Base y la Acción Cívica Mexicana. En 1935, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y la Obra Nacional de Buena Prensa. En 1936, los Coñejos. En 1937, la Unión Nacional Sinarquista, el Comité Pro-Raza, la Confederación de la Clase Media, la Acción Mexicana Revolucionaria (Camisas Doradas), el Comité Nacional Depurador de Razas Extranjeras y el Frente Anticomunista. En 1939, el PAN, el Partido Nacional de Salvación Pública y el Partido Revolucionario Anticomunista.

⁹ El pensamiento de Manuel Gómez Morín puede verse en James W. Wilkie y Edna Monzon de Wilkie, *México en el siglo XX. Entrevistas con Manuel Gómez Morín*, México, Editorial Jus, 1978.

posrevolucionarios”. Pero, por otro lado, la fundación del PAN también fue producto de un largo y áspero proceso de reorganización de diversos actores que abrevaban de esa ideología. La dura experiencia que los grupos y movimientos católicos conservadores habían tenido con la lucha cristera (1926-1929), los llevó a evaluar los saldos que les había dejado la confrontación violenta con el Estado, de tal manera que incluso las organizaciones más combativas experimentaban una crisis interna derivada de la necesidad de decidir sobre la ruta más apropiada para participar en la vida política.¹⁰ Además, el fracaso electoral de la campaña presidencial de José Vasconcelos (en 1929), hizo que la derecha liberal, civilista, tuviera una idea más clara del difícil panorama que le esperaba de seguir dando la batalla esencialmente en el terreno ideológico, sin involucrarse a fondo en la formación institucional de cuadros políticos.

Los fundadores de Acción Nacional buscarían trascender la naturaleza y las limitantes organizativas y programáticas de anteriores agrupaciones políticas y sociales. Desde 1926 Manuel Gómez Morín, el principal impulsor del PAN, venía considerando la necesidad de fundar un partido político que funcionara como una institución permanente, dedicada a la producción de una cultura ciudadana. Su convicción lo llevó durante varios años a trabajar para reunir a personajes que creyeran en la posibilidad de éxito de su proyecto. En el PAN se aglutinaron personajes que representaban las distintas vertientes del pensamiento de derecha, pero también había librepensadores y gente que tenía como única motivación, manifestarse en contra del desempeño del gobierno. A ese partido se incorporaron líderes de organizaciones católicas beligerantes que comprendían la necesidad de transitar por la ruta electoral, católicos liberales que tenían una visión más progresista sobre la política, empresarios que se identificaban con los planteamientos basados en el liberalismo económico que defendía el nuevo partido, ex funcionarios del gobierno porfirista, algunos otros que habían

¹⁰ De acuerdo con Pablo Serrano, la Unión Nacional Sinarquista y el PAN fueron producto de la escisión que sufrió La Base. Ésta fue una organización elitista y clandestina fundada en 1934, cuyo fin era instaurar el orden social cristiano en México, luchar contra el comunismo, la masonería y la aplicación de la ley anticlerical. Ésta experimentó una importante escisión cuando un sector de sus integrantes demandaron construir una nueva agrupación que saliera de la clandestinidad y disputara el poder político en el terreno electoral. A ese reclamo se adhirió el sector de católicos liberales, algunos líderes de las organizaciones católicas más beligerantes, como la Acción Católica de la Juventud Mexicana y un grupo de empresarios que no se identificaban con el programa de la Unión Nacional Sinarquista (fundada en 1937), que estaba dirigida por la corriente católica intransigente de acción radical. Véase Pablo Serrano, *La batalla del espíritu*, tomo I, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Serie Regiones, 1992.

participado en el movimiento antireeleccionista de Francisco I. Madero y ex colaboradores de los primeros gobiernos pos revolucionarios. En su formación también participaron intelectuales, profesionistas distinguidos y librepensadores.¹¹

El gran acuerdo que permitió la fundación del PAN fue la exclusión de su propuesta política y vida interna de las visiones y posiciones que buscaran la radicalización de su acción. Quienes simpatizaban con esa actitud pero que decidieron ser parte de Acción Nacional tuvieron que matizar sus posiciones o por lo menos esperar a mejores tiempos para volver a plantearlas.¹² El nuevo partido se construyó con una visión de largo plazo, basada en la idea de que se podía gobernar también desde la oposición. A diferencia de otras organizaciones de derecha que nacieron en el mismo periodo, algunas de las cuales tenían un perfil marcadamente ideológico y enfatizaban la confrontación *per se*, el PAN nació como una institución moderna para su tiempo.¹³ La gran distinción del partido fue su aceptación del distanciamiento de los ámbitos de acción de la Iglesia y el Estado, así como su constante demanda sobre la construcción de un orden democrá-

¹¹ Una referencia detallada sobre los fundadores del PAN pueden consultarse en Francisco Reveles, *El PAN en la oposición. Historia Básica*, México, Gernika, 2003, y en Víctor Manuel Reynoso, *Rupturas en el vértice. El Partido Acción Nacional a través de sus conflictos históricos*, México, Centro de Estudios de Política Comparada, 2007.

¹² En el movimiento sinarquista sucedió algo similar. Sin embargo, fue sólo hasta que triunfó el ala moderada, casi una década después de la fundación de la UNS (en 1937), cuando su dirigencia comenzó a probar suerte en el terreno electoral, impulsando la fundación de algunos partidos políticos de corta existencia y motivando a su base a buscar nuevos espacios para su participación política. Los partidos que fundó el sinarquismo fueron el Partido Fuerza Popular (1946-1949) y el Partido Unidad Nacional (1953-1954). Hacia 1957, los sinarquistas además se involucraron en el Partido Nacionalista de México, fundado años antes por algunos cristeros. Y en 1965, varios miembros de la UNS incluso llegaron a participar en el intento de formación del Partido Demócrata Cristiano, que no llegó a crearse. Por otro lado, hay que decir que los grupos secretos continuaron desarrollando sus actividades sobre la base de dos estrategias: la formación de nuevos grupos y la penetración de algunos de los ya existentes.

¹³ Por ejemplo, respecto a la UNS que había sido fundada dos años antes y que había logrado producir un importante movimiento social como opción de lucha, el PAN tenía diferencias importantes. Acción Nacional era una institución dirigida y sustentada sobre todo por la clase media educada, de áreas urbanas, con una propuesta definida sobre el papel del Estado y del gobierno; mientras que el sinarquismo estaba integrado por una élite de clase media y una base social mayoritariamente de clase baja, tenía su principal expresión en zonas rurales y mantenía un proyecto marcadamente ideológico. Para mayores detalles véase Manuel Rodríguez Lapuente, "Del sinarquismo y Acción Nacional: las afinidades conflictivas", en Jorge Alonso (comp.), *El PDM, movimiento regional*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1989.

tico en el país, basado en los valores de la democracia liberal. Desde ese momento, Acción Nacional se convirtió en un actor partícipe del proceso de evolución del Estado al enarbolar, desde la oposición, un proyecto político, económico y social alternativo. En sus primeros años de vida, Acción Nacional se distinguió –al amparo del liderazgo de Gómez Morín, que encabezó a su partido por diez años– por insistir en el afianzamiento de la democracia representativa, la vida republicana, un profundo proceso de “ciudadanización” de la esfera política y el establecimiento de un sistema de libertades públicas, en un contexto en que el presidencialismo y el corporativismo ejercían un fuerte control sobre todos los ámbitos de la vida nacional. Además de difundir su propuesta, los panistas también se involucraron activamente en la producción de una normatividad electoral, que permitiría la construcción del moderno sistema electoral.

Aunque en las elecciones de 1940 el PAN no presentó candidato a presidente de la República, respaldó la candidatura del general Juan Andrew Almazán. Desde ese momento, sus principales banderas fueron la exigencia de comicios limpios, una actuación imparcial por parte de las autoridades y el respeto al voto. El acatamiento a las reglas del juego político fue una estrategia que ayudó a los panistas a dar la imagen de una derecha propositiva que sabía participar dentro de los cauces institucionales, esa situación poco a poco le ayudaría a conquistar algunos espacios políticos, primeramente a nivel local y luego en el Congreso de la Unión.¹⁴ Sobre la marcha Acción Nacional se fue convirtiendo en un importante gestor social, que utilizó su posición dentro en la Cámara de Diputados para impulsar diversas propuestas de ley y proyectos de reformas constitucionales relacionadas con distintos temas.¹⁵

En los principios de doctrina del PAN quedaron plasmados claramente los reclamos de los católicos liberales así como los de católicos conservadores. Los panistas abogaban por la edificación de una nación que reconociera el valor de la tradición hispanista,¹⁶ apelaban a las raíces ibe-

¹⁴ En 1946 el PAN logra su primera diputación en Tacámbaro, Michoacán. En ese mismo Estado, un año después obtiene su primera alcaldía en Quiroga y su primera diputación local en Zamora. Además, los primeros panistas que ingresaron a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, lo hicieron por el periodo 1946-1949.

¹⁵ Dos de las líneas de investigación sobre el PAN que han sido muy poco abordadas tienen que ver precisamente con estos aspectos de la vida de ese partido.

¹⁶ El análisis de la doctrina de Acción Nacional deriva del documento llamado *Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional, 1939*, México, EPESSA, 1940. Los cambios que posteriormente se hicieron a su doctrina incorporaron algunos matices interesantes sólo en la letra, ya que en la práctica el panismo ha seguido rigiéndose esencialmente por los planteamientos originales.

roamericanas y pugnaban por la “unificación racial” con las “Naciones Hispánicas”. En ese sentido, la idea defendida por el panismo se oponía a la concepción nacionalista enarbolada por el gobierno, pues confrontaba su propuesta de construcción de una identidad nacional a partir del reconocimiento de una tradición propia, autóctona, de la existencia de una raza mestiza, así como de la necesidad de integrar a los grupos sociales en un ente homogéneo.

Acción Nacional confrontó la premisa del gobierno respecto a la existencia de un permanente conflicto de clases y en cambio defendió la idea de que la sociedad estaba integrada por ciudadanos iguales ante la ley. Su defensa de la “persona humana” le dio las bases para proponer que los individuos sólo requerían del “apoyo solidario” para poder realizar su “destino espiritual y material”, por lo que el Estado sólo debía tener un papel subsidiario. En este y en varios sentidos más, el PAN se apegaba a una visión *iusnaturalista* de las leyes sustentada en la defensa de un orden natural, una concepción que refrendaba el orden natural a partir del cual debían organizarse las relaciones sociales.

La búsqueda del orden hizo que los miembros del PAN exigieran el “ejercicio justo de la autoridad”; se trataba de un “orden que jerarquizara justamente las funciones e intereses” y que combatiera lo que consideraban era el desorden de los gobiernos posrevolucionarios. Por otro lado, Acción Nacional defendió la importancia de la educación cívica e insistió en terminar con los exabruptos del sistema presidencialista, el centralismo estatal, así como el autoritarismo de las instituciones y de la clase política, con lo que también mostró su desconfianza sobre el proceso de integración de una clase de políticos profesionales. Al reivindicar la figura de la “persona humana”, el panismo confrontó la propuesta de una política de masas cardenista, en contraste, defendieron la existencia de las comunidades intermedias,¹⁷ entre las que destacaban la familia, el municipio, las organizaciones profesionales y los grupos en función de una religión, como la esencia de las relaciones sociales.

En el plano económico, los panistas criticaron el papel que había tenido el Estado en la transformación de las relaciones de propiedad, sobre todo cuando incluso éste se constituyó en un importante propietario. Para

¹⁷ Sobre la teoría de los cuerpos intermedios como parte de la concepción política de la derecha véase José Luis Espíndola Castro, “La teoría de los cuerpos intermedios y la derecha tradicionalista mexicana”, en *Dimensión Antropológica*, Año 10, vol. 29, septiembre-diciembre, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2003.

ellos era importante dejar que se desplegara la fortaleza de la iniciativa privada como motor del desarrollo. Además, al igual que otros grupos de derecha, Acción Nacional se manifestó en contra de la visión que sobre la educación tenía el gobierno cardenista. Este partido consideraba que el Estado estaba imponiendo la concepción de un grupo y de un partido, por lo que había que defender el derecho de la mayoría (católica), en particular el derecho de los padres de familia a decidir sobre el tipo de educación que debían recibir sus hijos. Los panistas destacaron que el terreno educativo era el ámbito en el que debían dar la lucha por las conciencias, ya que en él se reproducían los valores y la tradición. En los documentos originales, el Estado todavía aparecía como un ente “persecutorio”, si bien ya no en el sentido de la acción política, sí a través de las leyes con las cuales pretendía “dominar las conciencias”. Por ello, los fundadores del PAN insistían en la relevancia de la educación privada, como medio para matizar lo que consideraban el abrumador despliegue ideológico del Estado, y aunque formalmente ese partido reconocía el proceso de secularización institucional que había acontecido en el país, seguían insistiendo en su demanda de “libertad religiosa”, un término que contravenía el precepto constitucional que sólo aceptaba la libertad de culto o de creencia religiosa.

Acción Nacional también participó de lleno desde las primeras reformas electorales. En 1949 y en 1951 ese partido trató de incorporar a la normatividad sus demandas sobre la creación de un padrón de electores permanente y confiable, así como el derecho de amparo para los partidos políticos, pero no logró tener éxito al interior de un Congreso mayoritariamente priísta. Más tarde, en 1963, los panistas brindaron su apoyo a la reforma con la que se introdujo un sistema mixto de representación que mantendría el principio de mayoría y distritos uninominales, complementado por otro de representación minoritaria, de tal forma que además de las diputaciones logradas por el sistema de mayorías, cada partido –si no había obtenido un mínimo de triunfos electorales directos– cumpliendo determinados requisitos, tenía derecho a un número proporcional de representantes a los que se les denominaba diputados de partido. A pesar de las críticas que se hicieron dentro y fuera del PAN a su dirigente Adolfo Christlieb Ibarrola (1962-1968) por apoyar esta reforma electoral, por primera vez los panistas mostraron una actitud más firme para participar en la construcción de la normatividad que habría de regir el juego electoral, al mismo tiempo que se dispusieron a interactuar con el gobierno. Christlieb creía que una sostenida participación electoral del PAN y el mejoramiento de las formas y procedimientos institucionales, aportarían a la construcción de una vía pacífica para la expresión del descontento social. Acción Nacio-

nal comenzó a percibirse como una oposición constructiva que deseaba participar en las decisiones del poder.¹⁸

A pesar de las ambigüedades y el eclecticismo de sus documentos originales, dos décadas después de haberse fundado el PAN había logrado defender la vía institucional como esencia de su estrategia política y había integrado una élite crítica pero consciente de la necesidad de buscar el diálogo más que la confrontación con el gobierno. Acción Nacional era un partido que participaba en la arena político-electoral sobre la base de las reglas vigentes, pero que también participaba de su transformación y había terminado por integrarse, desde la oposición, en la formación del Estado. Por otro lado, al interior de este partido se mantenía oculta una importante tensión, esencialmente entre dos visiones del mundo y dos concepciones de la política: la del catolicismo conservador y la del catolicismo liberal que habrían de imprimir su sello en la vida partidaria. Dicho conflicto pudo mantenerse bajo control gracias a que, durante buena parte de la historia opositora del PAN, poco a poco se fue imponiendo la vertiente que mantuvo su atención en los requerimientos que le imponía a su partido la lucha electoral, pero sobre todo porque las posibilidades de acceder al gobierno y desde allí impulsar un nuevo proyecto político y social se dieron muy recientemente.

LA REORGANIZACIÓN DE “LOS MARGINADOS”

Como resultado del crecimiento económico y la elevación de los índices de bienestar que había logrado el país en el contexto del desarrollo estabilizador (1940-1960), la oposición de derecha entre la que se encontraban el PAN, las organizaciones civiles de la clase media, el ala conservadora de la jerarquía eclesial y los grupos más beligerantes del empresariado, moderaron sus reclamos y se concentraron en sus propias dinámicas. No obstante, el periodo que transcurrió entre el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) marcaría otra etapa problemática entre la derecha y el Estado mexicano, situación que produjo dos efectos que habrían de incidir en la vida de Acción Nacional. Por un lado, marcó el inicio de una mayor integración de ese partido al proceso de cambio del modelo estatal y, por otro, empujó la evolución de los otros actores de la derecha opositora los que comenzaron a buscar nuevos canales para su participación política.

¹⁸ Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional. La larga marcha*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 276.

Desde el inicio de su administración, Echeverría quiso deslindarse de su responsabilidad sobre el clima de conflicto social y político que se había generado durante el gobierno de su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz.¹⁹ En un intento por legitimar su gobierno, el presidente de la República prometió reorientar la economía y aumentar el gasto social, particularmente en educación y salud.²⁰ Ofreció alentar la estabilidad política y resaltó la importancia que tenía la creación de nuevos partidos para fortalecer la vida democrática del país. A pesar de que el discurso presidencial planteaba la ampliación de los espacios de participación de los todos actores sociales, desde sus primeras acciones de política económica Echeverría provocó el enojo de los empresarios, ya que envió al Congreso de la Unión varias iniciativas de ley en materia fiscal sin consultar a los organismos empresariales. Las medidas adoptadas por el presidente de la República fueron interpretadas como la profundización del estatismo y aunque la reacción de los empresarios no fue uniforme, algunos sectores específicos entre los que destacaban el Grupo Monterrey y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se presentaron como los principales opositores a las iniciativas del Ejecutivo.

A lo largo de su sexenio, Echeverría insistiría en que una de sus principales tareas era incentivar la distribución equitativa del ingreso y ampliar el mercado interno de consumidores, no obstante, su equipo de gobierno habría de instrumentar varias acciones de política económica que a largo plazo resultaron contradictorias, por lo que al final de su administración generaron una fuerte crisis económica y un ambiente de incertidumbre social.²¹ Otros acontecimientos que contribuyeron a profundizar la crítica situación fueron la actividad guerrillera (tanto rural como urbana) que se desató durante esos años, y la ola de atentados en los que murieron dos connotados dirigentes empresariales, el regiomontano Eugenio Garza Sada (asesinado el 17 de septiembre de 1973, en manos de la organización denominada *Liga 23 de septiembre*) y el tapatío Fernando Aranguren. Por todo esto, los empresarios exigieron al gobierno el endurecimiento político para acabar con los brotes de oposición armada. Además, las invasiones de tierras en el noroeste del país llevaron a la movilización de los empresarios agroindustriales de esa región. Entre 1975 y 1976 el sector

¹⁹ La represión estudiantil de 1968 en buena medida condensó la esencia del gobierno de Díaz Ordaz, que entre otras cosas se había caracterizado por su actitud intransigente respecto a la posición, en especial de izquierda, por lo que en ese periodo se ejerció el control y la represión sobre varios movimientos sociales opositores.

²⁰ Véase Luis Medina Peña, *Hacia un nuevo Estado, 1929-1994*, op. cit., pp. 177-178.

²¹ *Ibidem*.

empresarial regiomontano logró articular una manifestación conjunta con los agricultores de Sonora, que habían sido afectados por las expropiaciones de tierras y el levantamiento de grupos campesinos que en su opinión eran solapados por el gobierno federal. El principal resultado del reflujo empresarial en ese periodo fue la fundación en 1975 del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organización que aglutinó a buena parte de su representación y a través de la cual comenzaron a hacer un contrapeso institucional al Estado.²²

La política aperturista del gobierno de Echeverría también creó expectativa en otros actores sociales. Por ejemplo, la élite de la Iglesia católica comenzó a considerar la posibilidad de avanzar en su búsqueda de un régimen distinto para esta institución.²³ Después de los pactos del 29 la Iglesia había disminuido considerablemente su activismo político e incluso su alta jerarquía se había manifestado en desacuerdo con la posibilidad de que se creara un partido político confesional. Esta actitud tenía que ver con el hecho de que la Iglesia encontró cierto acomodo dentro del nuevo arreglo institucional y deseaba mantener el control de la base católica a través de sus organizaciones de laicos. El convenio de no agresión entre la Iglesia y el Estado habría de permanecer casi inalterado entre el final de la década de los treinta y mediados de los años cincuenta, cuando la jerarquía eclesial comenzó a pronunciarse por el ejercicio de una plena libertad religiosa, y que al ser, la católica, la religión mayoritaria, tácitamente implicaba una ampliación de los derechos de esa Iglesia.

Ahora bien, la nueva ofensiva clerical de la década de los setenta además incluía, como parte de sus objetivos, disputar al Estado el terreno de la organización social. Esa postura fue impulsada por parte de un grupo mayoritario que controlaba la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y que incluía a buena parte de ese organismo y del clero nacional. En el

²² Respecto al conflicto entre los empresarios y el Estado en los años setenta pueden mencionarse: Juan Manuel Fregoso, Elvira Concheiro y Antonio Gutiérrez, *El poder de la gran burguesía*, México, Ediciones de Cultura Popular, 1979; Rogelio Hernández Rodríguez, *Empresarios, Banca y Estado. El conflicto durante el gobierno de José López Portillo, 1976-1982*, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Miguel Ángel Porrúa, 1988, Carlos Arriola, *Los empresarios y el Estado (1970-1982)*, México: Miguel Ángel Porrúa/Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, entre otros.

²³ Es difícil incluir aquí una reflexión sobre la complejidad del cambio en la Iglesia católica en México a lo largo de la historia contemporánea. Existe una importante bibliografía sobre este tema a la que el lector puede referirse, un libro importante es el de Roberto Blancarte, *Historia de la Iglesia católica en México*, México: Fondo de Cultura Económica, 1992.

contexto de la crisis económica y política, la Iglesia también experimentó una fuerte diferenciación interna derivada de la existencia de tres posiciones divergentes sobre el papel que ésta debía jugar en la vida política y social del país. Las tres posturas coincidían en la necesidad de respetar la separación jurídica entre la Iglesia y el Estado, pero también creían que era necesario abrir mayores espacios para progresar en el desarrollo de su proyecto de sociedad cristiana; las diferencias esencialmente giraban en torno a cómo proceder.

Uno de los grupos abogaba por mantener la cooperación con el Estado, con la esperanza de poder llegar a participar activamente en la construcción de un proyecto nacional-democrático, dentro del cual la Iglesia llevaría a cabo su misión. Otro sector consideraba que era necesario replantear lo más pronto posible la relación con el Estado y que la labor de la Iglesia debía canalizarse a áreas sustanciales como la social, esa era la vertiente más progresista. El tercer grupo demandaba ante todo una pronta redefinición de la relación con el Estado y un papel más activo de la Iglesia. La solución a la problemática interna habría de producirse hacia el final de esa década, a raíz del pontificado de Juan Pablo II que inició en febrero de 1978. Desde ese momento la Iglesia católica a nivel mundial habría de adoptar una política agresiva de construcción de alianzas mutuamente beneficiosas con los gobiernos de los países donde tenía una importante representación. En el caso de América Latina la Santa Sede se propondría avanzar hacia la reevangelización del continente, por lo que México empezaría a ser un territorio clave para sus fines.

Cuando José López Portillo asumió el gobierno federal (1976-1982), ni sus esfuerzos conciliatorios, ni los proyectos que puso a disposición de importantes empresarios, fueron suficientes para lograr su apoyo en torno al plan de desarrollo que él quería impulsar. López Portillo no abandonó la cuestión social, pero a diferencia de Echeverría, se enfocó a la creación de empleos aumentando el gasto público. Su programa de gobierno implicó en cierta forma regresar a las premisas del desarrollo estabilizador, pero con tres excepciones importantes: el incremento del gasto del gobierno, la inversión masiva en la industria petrolera y el aumento de la deuda externa.²⁴ Los primeros cuatro años de su administración fueron de reformas, búsqueda de reconciliaciones y cierto avance económico, todo lo cual pudo darse gracias a las ganancias derivadas de la explotación petrolera que al gobierno le ayudaron a crear una imagen de bonanza y que, de alguna manera, le permitieron relajar el ambiente. No obstante, la mala planificación de las finanzas públicas, así como los constantes actos de

²⁴ Luis Medina Peña, *Hacia un nuevo Estado, 1929-1994*, op. cit. p. 190.

corrupción, el nepotismo y autoritarismo que caracterizaba al gobierno, terminaron por acelerar el estallido de una nueva crisis económica ante la que el presidente de la República terminó por decretar la nacionalización bancaria, generando con ello un fuerte impacto económico, político y social.

En 1977 se llevó a cabo otro cambio importante a la ley electoral, mismo que repercutió positivamente en el avance de la oposición. En un intento por mejorar sus relaciones con quienes pedían mayor apertura del sistema político, el gobierno impulsó la reforma que introdujo dos modificaciones. Se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y una de sus funciones era contribuir a la formación de la representación social frente al Estado, de tal manera que desde ese momento los partidos recibirían financiamiento público. Además, se incluyó un sistema de representación basado en la idea de que 300 diputaciones se distribuirían por el principio de mayoría relativa y 100 sobre la base de la representación proporcional, a partir de listas regionales presentadas por los partidos políticos. Frente a esos cambios en la normatividad electoral, la dirigencia panista, entonces encabezada por Abel Vicencio Tovar (1978-1984), habría de pronunciarse por mantener una actitud conciliadora con el gobierno y aprovechar la nueva ley para que el PAN encontrara sentido a su reconstrucción interna. El apoyo a las nuevas reglas se dio en el marco de un segundo intento de institucionalización del partido (el primero se había hecho durante la dirigencia de Christlieb Ibarrola), por lo que el dirigente nacional se dispuso a utilizar la reforma para afianzar a su partido, dejando de lado la opinión de quienes no estaban de acuerdo en aceptar las nuevas reglas y que tampoco veían con buenos ojos aceptar el financiamiento público.

Por su parte, la derecha católica conservadora que había permanecido aglutinada por el movimiento sinarquista, que en sus orígenes había avanzado en el terreno de la lucha social, volvió a insistir en hacerse de un sitio dentro del sistema de partidos. El Partido Demócrata Mexicano (PDM), que se había constituido el 23 de mayo de 1971, en la celebración del trigésimo cuarto aniversario de la UNS, finalmente logró obtener su registro condicionado el 13 de mayo de 1978. El PDM funcionaba como el instrumento electoral del sinarquismo, si bien la relación de la UNS y el PDM no era de absoluta asimilación de una organización a otra, sí suponía la formación de una élite dirigente que sin dejar de ser sinarquista se comprometía con la consolidación de una línea partidaria.²⁵ Este partido encontraría una base

²⁵ Sobre el PDM, puede revisarse Guillén Vicente, Alfonso, "El Partido Demócrata Mexicano", en Octavio Rodríguez Araujo, *La reforma política y los partidos en México*,

importante de apoyo en los Altos de Jalisco y lograría captar la simpatía de importantes sectores sociales sobre todo en el occidente y el Bajío del país, donde el sinarquismo tenía sus principales bastiones.

El agotamiento del modelo estatal que apelaba al discurso del nacionalismo revolucionario dio pie al resurgimiento de las críticas sobre la función que aquél había cumplido como impulsor del crecimiento económico y como garante de la estabilidad social y política.²⁶ Los problemas económicos de ese periodo, que impactaron de lleno a la clase media, así como los vicios generados después de años de funcionamiento de un Estado centralizador y gobiernos autoritarios, contribuyeron a desacreditar al modelo con el que se había fundado el moderno Estado mexicano. El resquebrajamiento de la gran coalición revolucionaria que había aglutinado a buena parte de la sociedad en torno al partido oficial permitió que resurgiera con vigor el conflicto por la redefinición de la naturaleza y proyecto estatal. Fue entonces cuando inició un proceso de distanciamiento del PRI de algunos grupos sociales, se fueron creando las condiciones para el ascenso del ala tecnócrata al interior de ese partido y del gobierno federal y la oposición política comenzó a fortalecerse. El cambio en la naturaleza del Estado comenzaría a cuajar desde el inicio de los años ochenta y habría de consolidarse durante la década siguiente.

Con el gobierno de Miguel De la Madrid (1982-1988) se observaron las primeras modificaciones al proyecto estatal. El nuevo gobierno se caracterizó por retraer el gasto público, sobre todo en el área social, inició la privatización de importantes empresas paraestatales y buscó la inserción de la economía nacional en el contexto internacional, a través de la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Por otro lado, desde su campaña, De la Madrid se comprometió a llevar adelante la “democratización integral y la descentralización de la vida nacional”,²⁷ por lo que impulsó un proceso de liberalización política que implicó básicamente el reconocimiento de algunos triunfos a la oposición a nivel local; reformas constitucionales en materia legislativa, –en este sentido destacó la reforma

México, Siglo XXI, 1979 y Guillermo Zermeño Padilla y Rubén Aguilar Valenzuela, “Pasado y presente del PDM”, en *El Cotidiano*, Año 5, núm. 24, julio-agosto, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1988.

²⁶ Los detalles del tránsito entre el nacionalismo y el neoliberalismo se encuentran en Rolando Cordera y Carlos Tello, *México, la disputa por la nación*, op. cit.

²⁷ Hay que decir que uno de los requisitos que las instituciones internacionales imponían a los gobiernos de los países en vías de desarrollo para renegociar su deuda era la liberalización de la vida política nacional. Las condiciones de este nuevo acuerdo se conocen como el Consenso de Washington.

al artículo 115, para conceder mayores facultades y recursos a los municipios—; la aprobación de una nueva ley electoral en 1986, la cual contempló la ampliación de 100 a 200 diputados plurinominales, una situación que mejoró más el nivel de representación de la oposición, por lo que a pesar de los cuestionamientos a una parte de la reforma, la dirigencia del PAN optó por respaldarla.

En ese contexto, se reactivó la lucha de los distintos actores de la derecha opositora. El sector conservador de la Iglesia católica —para ese momento adherida a la política del Vaticano— inició con claras acciones para modificar su posición dentro del sistema político, en el cual aparentemente había tenido un papel pasivo. La jerarquía eclesial hizo un llamado a sus fieles y sacerdotes para que se manifestaran en torno a la problemática sociopolítica y los incitó a buscar mayor legitimidad jurídica para la Iglesia en México. El desarrollo de algunos procesos electorales en el norte del país fue el escenario en el que varios de los obispos de la región comenzaron abiertamente a participar en política. Desde el púlpito criticaron las reglas bajo las que se desarrollaban los comicios, invitaron a la feligresía católica a acudir a las urnas y, en algunos casos, la motivaron para que votara a favor del PAN.

El proselitismo empresarial que se había potenciado con la nacionalización bancaria, fue otro de los rasgos de esta nueva etapa. Las organizaciones más representativas del empresariado abandonaron su función de grupo de presión que tutelaba intereses gremiales y comenzaron a presentarse como agrupaciones que defendían los intereses de clase.²⁸ A partir de entonces los movimientos empresariales habrían de coincidir en su antiestatismo con otras fuerzas socio-políticas como el PAN y la Iglesia, por lo que se fue articulando un amplio movimiento de derecha. Emergió un nuevo discurso empresarial en el que se consideraba que el problema fundamental de México era político. La fracción más beligerante integrada sobre todo por empresarios de varios estados norteños, echó a andar una estrategia basada en tres líneas de acción: a) la corporativa, cuyo objetivo era incentivar la participación empresarial en la formulación de políticas

²⁸ Véase, por ejemplo: Matilde Luna, et. al., “Businessmen and politics in Mexico, 1982-1986”, en Sylvia Maxfield y R. Anzaldúa (eds.), *Government and private sector in contemporary Mexico*, Monograph Series, 20, San Diego, Center for U.S-Mexican Studies, 1987. Ricardo Tirado, “Los empresarios y la política partidaria” en *Estudios Sociológicos*, Vol. 5, núm. 15, México, El Colegio de México, 1987. Matilde Luna y Cristina Puga, “Modernización en México: la propuesta empresarial”, en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Año XXXVIII, Nueva Época, enero-marzo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

públicas y a través de las élites de sus organizaciones; b) la vía partidaria, con el fin de intervenir a través de los partidos políticos y las contiendas electorales, impulsando la candidatura de miembros de esa fracción; c) la cívica, que buscaba crear consenso con un sector específico de la sociedad civil, promoviendo movimientos por la defensa del voto, relacionados con la intervención del Estado en la economía y otros encaminados a plantear demandas sociales específicas. La Coparmex dio inicio a una serie de reuniones, como las denominadas “México en la libertad”, a través de las que logró involucrar a varios segmentos del CCE y a pequeños y medianos empresarios con presencia regional. Además de referirse a temas económicos y de orden político-electoral, la movilización de los empresarios también incluyó el tratamiento de asuntos morales, por lo que lograron vincularse con miembros de organizaciones civiles de ideología conservadora como Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (Dhiac), la Asociación Nacional Cívica Femenina (Ancifem), el Frente Cívico de Participación Ciudadana (FCPC), la Asociación Cívica Estudiantil (ACE), el Comité Nacional Provida y la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), entre otras. Estas agrupaciones, la mayoría de las cuales se fundaron al inicio de los años setenta, habían emergido a la vida pública justamente en el marco del cambio en la relación del Estado con la sociedad. El importante desarrollo que tuvo la sociedad civil durante la década siguiente no sólo implicó una amplia participación de grupos de izquierda, sino también de los sectores sociales de derecha.

A lo largo de este periodo (1970-1982), Acción Nacional experimentó importantes cambios producidos por la influencia que tuvo a su interior el reacomodo de otros actores de la oposición de derecha, así como de su propia adecuación respecto al Estado. Una transformación fundamental fue que durante los años ochenta, cada vez un mayor número de panistas habría de compartir la idea de hacer de su partido una organización con una clara vocación de poder. Ya desde 1971 se habían modificado algunos artículos de sus estatutos en aras de hacer del PAN un partido con mayores aptitudes para la lucha electoral. Además, las modificaciones electorales habían generado expectativas positivas en buena parte de los panistas sobre sus posibilidades de mejorar la posición política de su partido a través de las candidaturas plurinominales. En ese marco, dentro de Acción Nacional se expresaron dos grandes fracciones. Por un lado, la llamada “fracción pragmática” que estaba encabezada por personajes vinculados con la vieja derecha empresarial regiomontana, pero que también aglutinaba a líderes regionales y militantes panistas convencidos de la necesidad de hacer de su partido una institución política constructora de nuevas alianzas y con una real vocación por alcanzar el poder político. Por otro lado, la denomi-

nada “fracción doctrinaria” que mayoritariamente aglutinaba a la derecha católica, a fundadores y miembros de las familias panistas de más tradición, vinculados con la derecha asentada en el centro y occidente de México. Ellos se cohesionaban a partir de la defensa de los ideales de su partido y de la ponderación de la vía abstencionista como una forma de protesta a las condiciones de inequidad en las que se daba el juego político.²⁹

Si la elección de José Ángel Conchello (líder del ala pragmática) como dirigente del PAN en 1972 marcó un punto de quiebre importante, la confrontación entre ambas vertientes se reflejó en forma contundente en el contexto de la nominación de su candidato presidencial para la elección de 1976. En 1975 se realizó la convención extraordinaria para reconsiderar la participación electoral del PAN y después de una reñida votación, en la que ninguno de los dos candidatos obtuvo más de las dos terceras partes de los votos: Pablo Emilio Madero de la fracción pragmática, y Salvador Rosas Magallón, miembro del movimiento solidarista encabezado por Efraín González Luna. Los panistas decidieron participar en las elecciones federales con candidatos a diputados y senadores, pero no presentar candidato a presidente de la República. En esa ocasión no sólo estaba en juego una candidatura, sino la visión sobre el proyecto futuro del partido, por lo que por primera vez se involucraron incluso algunos miembros de la ultraderecha, quienes apoyaron la precandidatura de Madero.³⁰ El ambiente de camaradería que caracterizaba a los panistas, aun en situaciones de conflicto, en esa ocasión se tornó en un ambiente agresivo, en el que se vieron involucrados personajes cuyas formas de acción contravenían los usos y costumbres de Acción Nacional.³¹

Durante un poco más de treinta años Acción Nacional logró mantenerse vigente y empezar a crecer estructuralmente. Fue desde la segunda mitad de la década de los setenta y durante los años ochenta cuando este partido comenzó a modificar su naturaleza y objetivos para avanzar de forma decidida en el terreno electoral. La crisis del Estado nacionalista ayudó a que el PAN fuera el receptáculo de importantes sectores de la sociedad de

²⁹ Sobre esta distinción interna véase Soledad Loaeza, “El Partido Acción Nacional: de la oposición leal a la impaciencia electoral, en Soledad Loaeza y Rafael Segovia (comp.), *La vida política mexicana en la crisis*, México, El Colegio de México, 1987.

³⁰ Según el periodista Álvaro Delgado, los grupos de la derecha radical lograron “reventar la convención nacional del PAN, en la que fue precandidato un personaje al que desde entonces usaron para lograr mejores posiciones: Pablo Emilio Madero”. Véase *El Yunque: la ultraderecha en el poder*, México, Plaza y Janés, 2003, pp. 169-170.

³¹ Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994*, op. cit., p. 310.

clase media, inconformes con el desempeño del gobierno, pero también dio pauta para la reagrupación de varios actores de derecha en búsqueda de nuevos espacios de participación. El inicio del desmembramiento de las relaciones tradicionales entre el Estado y la sociedad mexicana también dio margen a que distintos actores opositores al régimen político, entre ellos los que se nutrían de la ideología de derecha, buscaran cauces nuevos para su inclusión en la vida política, entre los que Acción Nacional representó un ámbito particularmente atractivo.

LOS EXCLUIDOS AL PODER

Cuando comenzó la década de los noventa el Estado neoliberal apareció claramente como la panacea a los males del país. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) avanzó en la articulación de una gran alianza de fuerzas de derecha que comenzaron a encontrar un espacio dentro del nuevo modelo estatal. En el plano político, el presidente de la República fomentó la interlocución con actores clave que le permitieran sustentar lo que llamó el “proyecto modernizador”. Dicho plan se basaba en la “renovación de las relaciones del Estado con las iglesias” y en especial con la Iglesia católica. Su proyecto también contempló la actualización de las relaciones con la oposición partidista, por lo que el gobierno afianzó la interlocución con el PAN. En tanto que el nuevo esquema privilegiaba la modernización de la estructura económica y su inserción en el proceso de globalización, Salinas de Gortari profundizó las acciones ya probadas por su antecesor, como la disciplina financiera, avanzó en la renegociación de la deuda externa y en el proceso de privatización del sector paraestatal (incluyendo la banca antes nacionalizada). Además, entre 1991 y 1992 el gobierno puso fin al reparto agrario y firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, mismo que entró en vigor en el año de 1994.

Desde el final de los años ochenta el PAN había quedado libre de las ataduras que le imponía la defensa de su doctrina y se había impuesto una visión que reivindicaba la construcción de una estrategia clara para luchar por el poder político. Bajo la dirigencia de Luis H. Álvarez (1987-1993), el panismo se disponía a modernizar a su partido y a fortalecer su papel como interlocutor del gobierno. El ascenso de un importante grupo de empresarios del Bajío, occidente y norte del país, propició la convergencia de actores que compartían su crítica a los vicios que se habían generado bajo el esquema estatal anterior y que eran partidarios del neoliberalismo, pero también permitió la alianza momentánea de quienes se nutrían del pensamiento católico conservador de corte hispanista y de aquellos que

sustentaban su acción en el liberalismo burgués, más proclive a la influencia de la cultura norteamericana. Esos empresarios abonaron a la construcción de un puente natural con el ala tecnócrata del PRI y al interior del PAN desencadenaron una de las etapas más importantes del desarrollo de ese partido durante el siglo pasado.

En el marco del cambio en la naturaleza del Estado mexicano, el PAN, que siempre había participado en la actualización de la normatividad electoral, muchas veces sin tener una respuesta positiva a sus demandas, comenzó a encontrar una actitud receptiva por parte del gobierno y del PRI. En mayo de 1989, Luis H. Álvarez presentó un documento denominado Código Electoral de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, mismo que serviría para la elaboración del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) aprobado en 1990. El documento tenía varios puntos que habían sido propuestos por los panistas desde 1986, pero sobre todo insistía en restar al PRI las ventajas de su relación con el gobierno y reducir su capacidad para intervenir en el proceso electoral.³² Algunas de las principales demandas eran: la prohibición de la afiliación obligatoria y corporativa a los partidos políticos; la desaparición de los colegios electorales y la creación de un Consejo Federal del Sufragio responsable de la organización de los comicios en el que participarían el gobierno, los partidos políticos y ciudadanos sin partido; que todas las etapas del proceso electoral fueran públicas; la integración de un Tribunal Federal de Elecciones; la creación de un Registro Nacional Ciudadano; la emisión de una credencial de elector con fotografía y la prohibición del uso inadecuado de los recursos públicos en apoyo a los partidos políticos.

Si bien el dirigente panista había intentado presionar al gobierno para que la nueva ley recogiera la mayor cantidad de puntos planteados por el PAN, y no obstante las críticas que recibió al interior y fuera de su partido por intentar negociar con el gobierno, la mayoría del panismo apoyó su decisión de dar su voto aprobatorio a la ley, por considerar que ésta contenía varios elementos que permitirían avanzar hacia la construcción de un sistema electoral que ante todo garantizara la limpieza en los comicios.³³ A lo largo de esa década diversas iniciativas de ley que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión fueron aprobadas por las bancadas del PRI y el PAN, lo que era otro rasgo del cambio que había tenido la relación de ese partido con el gobierno. Las modificaciones de su interacción quedaron

³² Becerra, Pablo Javier. 1994. "Entre el autoritarismo y la democracia. Las reformas electorales en el sexenio de Salinas", en *Polis*, núm. 94, México, Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

³³ Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional. La larga marcha*, op. cit., p. 419.

en claro una vez más cuando el gobierno federal reconoció el triunfo del panista Ernesto Ruffo Appel, en 1989, en las elecciones para gobernador de Baja California.³⁴

Así las cosas, el PAN comenzó a perfilarse notoriamente como la opción partidista de derecha con mayores posibilidades de éxito. El PDM había tenido que enfrentar varios conflictos internos, derivados de su relación con la UNS, lo que dificultó más su eficiencia en el terreno electoral. A pesar del trabajo organizativo realizado por los pedemistas, el PDM seguía teniendo una presencia territorial muy acotada, por lo que no había representado mayor atractivo para otros actores de la derecha opositora en búsqueda de nuevos espacios de participación política. La década de los ochenta fue para el PDM una etapa de fuerte presión por tratar de mantener su registro, el cual perdió por primera vez en 1988, al no alcanzar el 1.5% de los votos estipulados por la ley electoral. Si bien con un gran esfuerzo sus integrantes habían recuperado su inscripción como partido político en 1991, la obtuvieron de manera condicionada al logro del porcentaje de votos requerido por la normatividad. En las elecciones federales de 1994 el PDM perdió su registro por segunda ocasión y, en 1997, lo perdió definitivamente al no alcanzar el 2% de la votación. Ante esa situación algunos militantes pedemistas comenzaron a participar activamente dentro de Acción Nacional. Este partido se convirtió en el instrumento idóneo a través del cual expresar sus demandas, pero sobre todo para su lucha por tener acceso al gobierno.

Mientras tanto, desde la trinchera de la Iglesia católica fueron apuntalándose las posiciones más conservadoras de la derecha. El primer Nuncio Apostólico, Girolamo Prigione, que había llegado a México en 1978 y permaneció en el país por casi dos décadas, se había dado a la tarea de mejorar la posición de la Iglesia en México. Para ello se concentró en que la opinión de la alta jerarquía católica llegara a ser un factor de legitimidad y poder, a partir del cual la institución eclesial habría de resurgir a la

³⁴ Luego siguió la elección de Guanajuato en 1991, un proceso en el que Carlos Medina Plascencia llegó a ser gobernador interino en condiciones muy distintas a las del triunfo del PAN en Baja California. La jornada electoral en Guanajuato terminó con una crisis producto de la denuncia de fraude y la movilización social que encabezó Vicente Fox (quien había sido el candidato del PAN). Ante la proclamación de Fox como ganador de la contienda y la intensidad de los apoyos recibidos por el panista, el presidente Carlos Salinas intervino para que se anularan los resultados de la contienda, incluso una vez que las autoridades electorales del Estado habían dado el triunfo al priista Ramón Aguirre. La negociación entre el gobierno federal y la dirigencia panista que permitió que Medina Plascencia asumiera la gubernatura de manera interina fue conocida coloquialmente como *concertación*.

vida política.³⁵ El gran logro del Nuncio fue la negociación que hizo con el gobierno federal en 1991, respecto a la reforma de varios artículos constitucionales que concretó al año siguiente, cuando el gobierno mexicano restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano.

Por la relevancia de las modificaciones, es pertinente mencionarlas aunque sea en forma breve. En la redacción del artículo 3º se suprimió la prohibición para que se imparta educación religiosa en los planteles particulares, así como la negativa para que las instituciones religiosas participen en la educación primaria, secundaria y normal. En el artículo 5º, donde se garantiza el libre ejercicio de toda profesión lícita, se suprimió la referencia a las órdenes monásticas. En el texto del artículo 24 se estableció la posibilidad de que los actos de culto público de manera excepcional puedan realizarse fuera de los templos. En el artículo 27 que prohibía la adquisición de propiedades por parte de las asociaciones religiosas, se aceptó el derecho para “adquirir, poseer o administrar” exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto”. En el contenido del artículo 130 se incorporó la idea de que las iglesias y agrupaciones religiosas tienen personalidad jurídica una vez que obtienen su registro y se otorgó el derecho de voto activo para los ministros de culto, con prohibición de ser votados, aunque permaneció la idea de que éstos no pueden asociarse con fines políticos y oponerse en reunión pública a las leyes del país.³⁶

Con miras a una nueva reforma electoral, el PAN reclamó equidad para los partidos, la eliminación de la calidad de partido oficial y la suspensión del flujo de recursos en su apoyo. Además demandó la transparencia del uso de recursos públicos por parte de los partidos, la reglamentación de los gastos de campaña, la revisión del padrón electoral y la inclusión de la credencial de elector con fotografía, así como la creación del Registro Nacional Ciudadano y la Cédula Nacional de Identidad.³⁷ Varios de esos lineamientos habrían de servir de base para la aprobación de la nueva ley en 1993, por lo que bajo la dirigencia de Carlos Castillo Peraza (1993-1996) el PAN adoptó una postura considerablemente distinta a la que antes había

³⁵ Para mayores detalles sobre la estancia en México de Girolamo Prigione véase Bernardo Barranco, “La jerarquía católica y la transición mexicana”, en Alberto Aziz y Jorge Alonso (coords.), *Sociedad civil y diversidad* (III), México, Cámara de Diputados LIX Legislatura/Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social/Miguel Ángel Porrúa, 2005.

³⁶ Sobre los cambios a la Constitución mexicana véase Manuel Canto Chac y Raquel Pastor Escobar, *¿Ha vuelto Dios a México? La transformación de las relaciones Iglesia Estado*, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C, 1997, pp. 101-102.

³⁷ Luis Medina Peña, *Hacia un nuevo Estado, 1929-1994*, op. cit., p. 282.

mantenido, dejó de atribuir al gobierno toda la responsabilidad en materia electoral e insistió en que la participación y la credibilidad de los comicios también dependía de los partidos políticos.

El último gobierno priísta del siglo XX, que encabezó Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), habría de dedicarse a consolidar el esquema neoliberal del Estado, avanzando en la parte social del proyecto. Al nuevo presidente le tocaba instrumentar la reforma social neoliberal, pero el “bienestar de la familia” resultó sólo un slogan de campaña. Lo que realmente ocurrió fue que la desigualdad aumentó, el ingreso continuó concentrándose en grupos privilegiados y prevalecieron la corrupción y la ineficiencia administrativa. Su sexenio transcurrió en un ambiente de fuerte tensión, producto de las dificultades que había dejado el gobierno salinista en materia económica, las cuales derivaron en el denominado “error de diciembre” de 1994, que significó una nueva devaluación del peso. Por otro lado, la confrontación al interior de la clase política que se venía recrudeciendo desde la administración anterior,³⁸ así como la aparición de nuevos movimientos sociales y guerrilleros que fueron severamente reprimidos durante el gobierno zedillista,³⁹ contribuyeron a que la tensión social, política y económica se mantuviera latente a lo largo del sexenio.

La oposición partidista se fortaleció todavía más, en especial la de derecha representada por el Acción Nacional, ya que ésta mantenía importantes afinidades con el proyecto de gobierno sobre todo en los aspectos económico y político. Después de varios triunfos en algunas entidades de la República donde el PAN gozaba de amplio respaldo por su historia de lucha por la democracia, el panismo había probado que podía gobernar y se había consolidado como una oposición importante en el Congreso de

³⁸ Ernesto Zedillo llegó a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República, después de que el 23 de marzo de ese año, Luis Donald Colosio fuera asesinado en Tijuana, Baja California. Colosio había llegado a ser un candidato incómodo para algunos sectores dentro de su partido, en especial para los tecnócratas más radicales y los grupos de poder económico. En su campaña manifestó su deseo de trabajar para recomponer al PRI y acercarlo a los sectores marginados. A la división del PRI por el asesinato de Colosio se agregó el descrédito de la élite gobernante debido a los asesinatos políticos como el del Obispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993 y el del priísta Juan Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994. Además, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acontecido en Chiapas el 1º de enero de 1994, justo después de entrar en vigor el TLC y de que el gobierno federal anunciara la entrada de México a la globalización, había llamado la atención sobre el México indígena, marginado de los supuestos beneficios del modelo económico neoliberal y además había cuestionado el funcionamiento del sistema político.

³⁹ Las matanzas de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero y Acteal, Chiapas, ocurrieron en junio de 1995 y diciembre de 1997, respectivamente.

la Unión. Para el final de esa década, Acción Nacional había logrado crear una imagen de éxito ante importantes sectores de la sociedad que para entonces buscaba una alternativa a los gobiernos priístas que habían acabado con sus expectativas de movilidad social y de apertura política. Después de haber matizado sus posiciones frente al Estado, el PAN había llegado a ser la *oposición funcional* al neoliberalismo. Las nuevas condiciones políticas permitieron la integración de una amplia coalición de derecha, en la que participaba la derecha opositora y el ala tecnócrata del PRI.

Producto también de esas nuevas condiciones, el PAN comenzó a sufrir nuevos cambios en su interior. En octubre de 1998, durante la dirigencia de Felipe Calderón Hinojosa, los panistas dieron a conocer su decisión de incorporarse a la Democracia Cristiana, movimiento que a nivel internacional había evolucionado de la posición progresista con la que había sido fundado al final de los años cuarenta, hacia una postura conservadora. La idea de pertenecer a la organización democristiana no era nueva en el PAN, ya en la década de los cincuenta había sido planteada por un grupo de miembros del sector juvenil, pero su propuesta no había sido bien recibida por la dirigencia nacional y en especial por Manuel Gómez Morín, quien consideraba que su partido debía consolidar su vida institucional a partir de un programa adecuado a la realidad mexicana y no copiando propuestas que incluso lo llevaran a parecer un partido confesional. En ese momento, la negativa de la mayoría panista a incorporarse a la Democracia Cristiana produjo la salida de varios de sus impulsores quienes argumentaron que su partido había dejado de lado su compromiso social. Aquellos que decidieron permanecer dentro del PAN continuaron actuando bajo los lineamientos de la tendencia dominante.

La elección Luis Felipe Bravo Mena como dirigente del PAN por dos períodos consecutivos (1999-2002 y 2002-2005) allanó el camino para el ascenso de la ultraderecha, una parte de la cual provenía de grupos clandestinos como la Organización Nacional del Yunque, surgida a mitad de los años cincuenta.⁴⁰ Aunque el nuevo presidente panista había llegado a este partido a través de la Coparmex, en su trayectoria política también figuraba haber sido parte de Yunque, donde había fungido como reclutador de jóvenes, algunos de los cuales tuvieron una rápida movilidad política al incorporarse al PAN en estados como Guanajuato. En esa entidad lograron ser parte del equipo del gobernador Vicente Fox (entre 1995 y 1999) y una

⁴⁰ Esa situación se profundizó cuando Manuel Espino, que había sido Secretario General del PAN en el periodo de Bravo Mena, asumió la dirigencia de su partido por el trienio 2005-2008.

vez que éste ganó la elección presidencial de 2000 se integraron a distintos niveles de la estructura del gobierno federal.

La élite panista del final de los años noventa se configuró con personajes que representaban a los sectores sociales que dieron vida al PAN: la derecha católica, tanto liberal como conservadora, así como la vieja derecha empresarial. Pero también habían cobrado importancia nuevos grupos que comenzaban a disputar el control interno. La nueva derecha empresarial coincidía con la tecnocracia priísta respecto a su idea de incorporar a la economía nacional al proceso de globalización. También se habían anexado miembros de las corrientes antes marginadas de la vida institucional de ese partido, como la derecha ideológica sinarquista que tenía una larga tradición de lucha social y personajes vinculados con una diversidad de organizaciones de ultra derecha. Además, en el más puro pragmatismo, algunos expriístas se habían incorporado a la élite de Acción Nacional. Para aquellos que siempre habían sido parte de la oposición de derecha, el PAN se había convertido en el catalizador de viejos y nuevos reclamos, y por lo tanto en el espacio donde habrían de decantarse sus principales grupos. Para quienes eran recién llegados a las filas opositoras, ese partido se convirtió en un instrumento para ascender a mejores posiciones políticas, sin tener que comprometerse con un proceso radical de conversión.

En general, la élite panista se caracterizaba por ser un grupo político joven, la edad de la mayoría de sus miembros oscilaba entre los 35 y 50 años.⁴¹ Se trataba de un grupo político en proceso de profesionalización en varios sentidos. En primer lugar, la mayoría de los miembros de dicha élite había realizado sólo estudios de licenciatura y en universidades estatales. Muy pocos habían continuado su educación formal y básicamente a través de diplomados o maestrías. Sólo un grupo muy pequeño había concluido estudios doctorales en instituciones del extranjero, sobre todo en países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Venezuela o Chile. A los últimos cuatro de éstos los panistas habían viajado usando las redes de la Democracia Cristiana.

En segundo lugar, los líderes del PAN se habían preparado en áreas que privilegian el conocimiento con sentido técnico. Destacaban los abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y, por supuesto, los administradores de empresas. Pocos de ellos habían estudiado alguna profesión de naturaleza social o política, por lo que casi no figuraban los politólogos, sociólogos

⁴¹ Sobre el perfil de la élite del PAN durante la década de los noventa véase Tania Hernández Vicencio, *La élite de la alternancia. El caso del Partido Acción Nacional*, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, octubre-diciembre, México, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

o antropólogos. En tercer lugar, sólo mínima parte tenía consolidada su carrera política, la generalidad había construido sus trayectorias políticas en ciertas regiones del país, por lo que estaban más habituados a la discusión y atención de problemas relacionados con la vida local y de las instancias de su partido en ese mismo nivel, que con cuestiones de la agenda nacional.

La élite del PAN había sido socializada principalmente en tres ámbitos: en organizaciones empresariales (entre los que destacaba la Coparmex), en el entorno de las viejas y nuevas organizaciones vinculadas a la Iglesia católica (desde el Movimiento Familiar Cristiano o Cursillos de Cristiandad, hasta grupos como Fé, Testimonio y Esperanza), y también eran importantes sus vínculos con organizaciones civiles de ultraderecha relacionadas en mayor o menor medida con la organización clandestina del Yunque (como Dhiac, Ancifem, Provida, etcétera). El liderazgo panista se componía con personas que provenían sobre todo de siete regiones del país, las cuales se caracterizaban por reproducir un ambiente sociocultural conservador. Al respecto destacaban la región noroeste (Baja California y Sonora), la región noreste (Nuevo León y Chihuahua), la región Bajío (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí), la región occidente (Jalisco), la región área metropolitana (Estado de México, Morelos y el Distrito Federal), la región sureste (Yucatán) y la región centro-golfo (Veracruz y Puebla), esta última estaba representada en lo que corresponde al corredor económico que va de la capital de Puebla a Orizaba, Córdoba y el puerto de Veracruz. Los bastiones panistas prácticamente seguían el patrón de la ruta cristera y del movimiento sinarquista.

El triunfo del candidato panista Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2000, llevaría al posicionamiento en la escena pública de diversos personajes de la ultraderecha, cuya actuación pasó a ser parte de la vida política cotidiana del país. Ante las limitaciones de su formación profesional y política, así como por el origen que muchos de ellos tenían en regiones y organizaciones conservadoras excluidas de la construcción del Estado y del proyecto institucional de su partido, fueron elementos que contribuyeron a dificultar su tarea como funcionarios o dirigentes partidistas. En la mayoría de los casos, estos personajes trasladaron al ejercicio de su función pública sus valores y convicciones personales, además intentaron modificar la esencia de algunas políticas públicas. Contravinieron el principio de laicidad del Estado mexicano y reanimaron la pugna por la educación, modificaron aspectos sustanciales de la política de salud y siguieron apelando a la libertad religiosa, al mismo tiempo que buscaron avanzar respecto a la posesión de medios de comunicación masiva.

COMENTARIOS FINALES

El siglo XX concluyó con el ascenso de la oposición de derecha al gobierno federal. Esta situación en buena medida fue posible porque el PAN fue a lo largo de muchas décadas el representante institucional más importante de esa parte de la oposición. La capacidad de adaptación que Acción Nacional mostró a lo largo de los años y la constante participación que tuvo en el proceso de cambio de la naturaleza estatal hicieron de ese partido una excepción entre los partidos de derecha que se fundaron el siglo pasado. El PAN no sólo logró permanecer en la lucha electoral, sino además transitar de la oposición al gobierno. Con el triunfo del panista Vicente Fox Quesada en las elecciones presidenciales de 2000, ese partido se integró de lleno a la consolidación de un nuevo proyecto estatal, ahora desde el gobierno. No obstante, a través de su estructura actores antes proscritos del proyecto partidario y del desarrollo estatal pasaron a ser parte activa de esta nueva etapa de la historia institucional del país.

La tensión que surgió en la fundación del PAN resurgió en su vida interna y se expresó también en el ejercicio de gobierno, por lo que Acción Nacional llegó al final del siglo pasado inmerso en una gran paradoja. Lejos de mostrarse como una opción de derecha moderna, en apego a las tesis del liberalismo político que le dieron vida y que prevalecieron como eje de su acción durante buena parte de su historia opositora, el PAN mostró serias dificultades para impulsar un desarrollo institucional acorde a los nuevos tiempos políticos y a los retos que le impone el ejercicio de gobierno. Los grupos más radicales de la derecha católica que llegaron a copar la dirección de ese partido y los principales cargos del gabinete presidencial, concibieron al sexenio de Fox como el momento clave para saldar sus deudas con el Estado y avanzar hacia la redefinición del proyecto político y social que desde su punto de vista habría de sustentarse en la moral cristiana conservadora.

A pesar de que la vertiente defensora de la institucionalidad y la tradición panista recuperó la dirigencia del PAN cuando Germán Martínez Cázares fue elegido presidente nacional a principios de 2007, no parece lógico pensar que después de los avances logrados por la ultraderecha, tanto dentro como fuera de su partido, ésta se resigne a perder definitivamente su posición dentro de Acción Nacional. Seguramente falta mucho por ver en esta nueva etapa en la que aquellos que antes fueron marginados han encontrado las vías para acceder al poder.